

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO  
PROCURADURÍA DE LA  
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 557

Panamá, 25 de abril de 2023

Proceso Contencioso Administrativo  
de Plena Jurisdicción.

Alegato de conclusión.

Expediente: 1235942022.

Los Licenciados Gian Carlos Cruz (apoderado principal) y Roger Law Tong Lau (apoderado sustituto) actuando en nombre y representación de **Ella María Palacios Adames**, solicitan que se declare nula, por ilegal, la Resolución DM OIRH-0128-2022 de 16 de agosto de 2022, emitida por el **Ministerio de Ambiente**, su acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Señor Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante usted de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 39 de la Ley 33 de 1946, para presentar el alegato de conclusión de la Procuraduría de la Administración dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción descrito en el margen superior; oportunidad procesal que nos permite reiterar lo expresado en nuestro escrito de contestación de la demanda, al afirmar que no le asiste la razón a la recurrente en lo que respecta a su pretensión.

**I. Antecedentes.**

De acuerdo con lo que consta en autos, la acción contencioso administrativa bajo examen está dirigida a que se declare nula, por ilegal, la Resolución DM OIRH-0128-2022 de 16 de agosto de 2022, emitida por el **Ministerio de Ambiente**, mediante la cual se removió a **Ella María Palacios Adames**, del cargo de Coordinador de Planes y Programas en el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), que ocupaba en dicha entidad (Cfr. fojas 46-47 del expediente judicial).

En este orden de ideas, y luego de agotada la etapa procedimental correspondiente, el 7 de diciembre de 2022, **Ella María Palacios Adames**, a través de su activador judicial, acudió

a la Sala Tercera para interponer la demanda que ocupa nuestra atención, con el objeto que se declare nula por ilegal, la Resolución DM OIRH-0128-2022 de 16 de agosto de 2022; su acto confirmatorio, y que, como consecuencia de tal declaratoria, se ordene a la institución demandada que la reintegre al cargo que ocupaba, así como el consecuente pago de los salarios caídos (Cfr. foja 23 del expediente judicial).

Luego de examinar los planteamientos expuestos, este Despacho se opuso a los argumentos esgrimidos por la recurrente, puesto que de acuerdo con las evidencias que reposan en autos, el acto acusado de ilegal, se dictó conforme a derecho, habida cuenta que se ciñó al principio del debido proceso, porque se acreditó que desvinculación de **Ella María Palacios Adames**, se basó en la facultad discrecional que le está atribuida a la autoridad nominadora para nombrar y remover libremente a los funcionarios que carezcan de estabilidad en el cargo por no haber ingresado al servicio público mediante un concurso de méritos, o estar amparada por una ley especial; por lo que los razonamientos ensayados por aquella con la finalidad de demostrar su ilegalidad, carecen de sustento.

#### **Actividad probatoria.**

A través del Auto de Pruebas 86 de veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023), la Sala Tercera admitió a favor de la demandante los documentos visibles a fojas 28-29, 30, 31, 32-33 y 34 del expediente judicial, entre otros, los cuales guardan relación con el proceso llevado en la vía gubernativa.

Así mismo, debemos indicar, que a través del citado Auto de Prueba, no se admitieron los documentos aportados por la actora visibles a fojas 27, 35-36, 38 y 39 del infolio, por no cumplir con lo dispuesto en los artículos 833 y 842 del Código Judicial.

Por otro lado, se admitió la prueba de informe aducida por este Despacho, consistente en la copia autenticada del expediente administrativo.

El contenido del Auto de Pruebas revela que la accionante omitió efectuar mayores esfuerzos para acreditar sus pretensiones, por lo que no se acogió a lo regulado en el artículo

784 del Código Judicial que, en esencia, dispone que incumbe a las partes acreditar su posición en el proceso con el propósito de desvirtuar lo determinado en los actos objeto de reparo.

En la Sentencia de diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el Tribunal precisó:

“En este orden de ideas igualmente debemos, tener presente que a las partes les incumbe demostrar los hechos y al Juez dispensar el Derecho, o sea, el ‘onus probandi’ contemplado en nuestra legislación en el artículo 784 del Código Judicial, que a la letra dice:

...

De ahí que, la carga de la prueba, implica la obligación que tiene una parte de aportar los medios de convicción; además, ese es un deber de las partes y sus apoderados, pues cuando no aparece probado el hecho, ello no permite que el Juez pueda otorgar la pretensión de quien pide; y esto se resume en esa frase romana ‘onus probandi incumbit actori’; es decir, la carga de la prueba le incumbe al actor.


En efecto, este Principio obliga al actor probar lo que pide, pues a él le interesa que su pretensión sea concedida en los términos requeridos por éste dentro de la demanda, tal como lo establece el Código Judicial.”

La jurisprudencia transcrita viene a confirmar el deber que tiene toda persona que recurre a la Jurisdicción Contencioso Administrativa de probar lo que pide.

En el marco de los hechos cuya relación hemos expuesto en los párrafos precedentes, esta Procuraduría solicita a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que **NO ES ILEGAL** la Resolución DM OIRH-0128-2022 de 16 de agosto de 2022, emitida por el **Ministerio de Ambiente**; y, en consecuencia, se desestimen las demás pretensiones de la demandante.

**Del Honorable Magistrado Presidente,**

  
Rigoberto González Montenegro  
**Procurador de la Administración**

  
María Lilia Urriola de Ardila  
**Secretaria General**